

# TABLA COMPARATIVA ENTRE LA LOTC<sup>1</sup> Y LA LO 6/2007<sup>2</sup> PARA SU REFORMA<sup>3-4</sup>

<sup>1</sup> Aprobada por LO 2/1979 y reformada por LLOO 8/1984, 4/1985, 6/1988, 7/1999 y 1/2000. Vid. el texto integro vigente, por ejemplo, en <http://www.tribunalconstitucional.es/TRIBUNAL.htm>.

<sup>2</sup> Publicada en BOE de 25-5-2007 (<http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22541-22547.pdf>).

<sup>3</sup> Las modificaciones y derogaciones del anteproyecto se señalan en **fuentes roja** y las del anteproyecto sometido por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros el 11-11-2005, para su aprobación y remisión a las Cortes en **fuentes azul**. El Proyecto ha tenido entrada en la Cortes el 22-11-2005, publicándose en el BOCG del 25 siguiente; vid. [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-01.PDF); las modificaciones observadas se resaltan en **fuentes aguamarina**. El plazo de presentación de enmiendas ha sido ampliado, hasta al fecha, en cinco ocasiones, la última el 7-2-2006 (BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 8-2-2006, nº 60-6, [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-06.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-06.PDF)). Las enmiendas e índice de enmiendas al articulado se han publicado en BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 8-2-2006, nº 60-7 ([http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-07.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-07.PDF)), con corrección de errores en BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 8-2-2006, nº 60-8 ([http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-08.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-08.PDF)). El Informe de la Ponencia ha aparecido en el BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 8-2-2006, nº 60-9 ([http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-09.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-09.PDF)) y las novedades introducidas son resaltadas en **fuentes azul**. De este informe han sido suprimidas las modificaciones contenidas en los siguientes preceptos: arts. 8, 22, 34.2, 39, 40.2, 48, 53, 54, 65.1, 72. 3 y 4, 75. 1, 75 quinqué 4, 80, 81 y DA única. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha emitido su dictamen el 7-3-2007 BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 9-3-2007, nº 60-10, [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-10.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-10.PDF)); las modificaciones se resaltan en **fuentes verde**; los arts. 8, 40. 2, 48, 53 y 54 han sido retomados y se ha abandonado el art. 19. Se resaltan en **fuentes violeta** las modificaciones introducidas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 15-3-2007 (BOCG, VIII LEGISLATURA, A, 22-3-2007, nº 60-13, [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_060-13.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_060-13.PDF)).

<sup>4</sup> Su EdM reza como sigue:

"I

Las democracias modernas se basan en Constituciones dotadas de valor normativo garantizado en forma cada vez más extendida por órganos encargados del control de constitucionalidad, que ejercen la jurisdicción constitucional. La Constitución Española de 1978 se inscribe en esta tradición y recupera el precedente del Tribunal de Garantías establecido por la Constitución Española de 1931.

El sistema constitucional español se asienta ya sobre una práctica política de más de cinco lustros de experiencia. Sus instituciones se han revelado como eficaces instrumentos de regulación de la convivencia, y entre ellas el Tribunal Constitucional ha cumplido con una tarea especialmente relevante, como centro de equilibrio del sistema de poderes separados, territorial y funcionalmente, que la Constitución articula. Las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional por la Constitución se desarrollan en la ley orgánica reguladora de la institución de acuerdo con el mandato de su artículo 165: la protección de la supremacía constitucional, y la consiguiente depuración del ordenamiento de las normas contrarias a los mandatos constitucionales, se complementan con la protección de derechos fundamentales, así como la resolución de conflictos territoriales. La pretensión del constituyente de dotar de la mayor eficacia al órgano de control de constitucionalidad es comprensiva de todas y cada una de las mencionadas facetas. La presente reforma pretende reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente con su misión constitucional.

La jurisdicción constitucional arranca de las previsiones constitucionales del título IX y la configuración legal encomendada al legislador orgánico constituye un elemento relevante que tuvo su primera expresión en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Esta norma ha constituido el instrumento indispensable para la realización de las tareas a cargo del Tribunal Constitucional y los procedimientos en ella previstos han arraigado en la vida y la conciencia jurídica españolas. La amplia experiencia en su aplicación se refleja en el gran número de casos planteados y resueltos -en constante incremento hasta alcanzar en el año 2004 el número de 7.951 asuntos ingresados y 7.823 resoluciones dictadas- y también ha dado lugar a varias reformas legislativas (Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre; Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio; Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio; Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril; Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero). Sin embargo, las mencionadas modificaciones no habían acometido hasta el momento una reforma que afrontase de manera conjunta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el objetivo de esta ley orgánica.

---

La experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por otro lado, la realidad de los hechos ha permitido también constatar la lentitud de los procedimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de las que es el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido, esta ley orgánica intenta dar solución a todo este conjunto de problemas, y para ello procede a adecuar la normativa para dar respuesta a los problemas y exigencias que se derivan de la realidad práctica del funcionamiento y organización del Tribunal Constitucional.

Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en relación con las demás funciones del Tribunal Constitucional, la ley procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata de medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria.

### III

La ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no sólo se les permite realizar alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el fondo de la cuestión. Al tiempo, se introduce la posibilidad de personación de los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal Constitucional en los 15 días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este procedimiento de constitucionalidad, siguiendo en esto las directrices contenidas en la Sentencia de 23 de junio de 1993, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El elevado número de demandas de amparo ha provocado un amplio desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en detrimento de otras competencias del Tribunal Constitucional. El número de solicitudes de amparo y el procedimiento legalmente previsto para su tramitación son las causas que explican la sobrecarga que en la actualidad sufre el Tribunal a la hora de resolver estos procedimientos de garantía de los derechos fundamentales. Por esta razón, las reformas que se abordan van dirigidas a dotar al amparo de una nueva configuración que resulte más eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos constitucionalmente previstos para esta institución. Y así, entre las modificaciones que se introducen en relación con el amparo se pueden destacar el cambio en la configuración del trámite de admisión del recurso, la habilitación a las Secciones para su resolución y la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

La primera de estas novedades es la que afecta a la configuración del trámite de admisión del recurso de amparo. Y es que frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución. Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado. Esta modificación sin duda agilizará el procedimiento al transformar el examen de admisión actual en la comprobación en las alegaciones del recurrente de la existencia de relevancia constitucional en el recurso. En cuanto a la atribución de potestad resolutoria a las Secciones en relación con las demandas de amparo, incrementa sustancialmente la capacidad de trabajo del Tribunal.

Otra novedad significativa se encuentra en la introducción de una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas. En tales supuestos la nueva regulación ordena elevar la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia de amparo, de manera que la cuestión de inconstitucionalidad se resolverá por el Pleno en ulterior sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

La protección y garantía de los derechos fundamentales no es una tarea única del Tribunal Constitucional, sino que los tribunales ordinarios desempeñan un papel esencial y crucial en ella. Por ello, y con la intención de aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria para la tutela de los derechos fundamentales se modifica el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. De este modo se introduce una configuración del incidente de nulidad de actuaciones mucho más amplia, porque se permite su solicitud con base en cualquier vulneración de

**Art. 4**

<p>Uno. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional.</p>	<p>1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. <b>El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo, podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia en los asuntos sometidos a su conocimiento.</b></p>
<p>Dos. El Tribunal Constitucional apreciará, de oficio o a instancia de parte, su falta de jurisdicción o de competencia.</p>	<p>2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.<sup>5</sup></p> <p>3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución.</p>

**Art. 6. 1.**

<p>Uno. El Tribunal Constitucional actúa en Pleno o en Sala.</p>	<p>1. El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala <b>o en Sección.</b></p>
--	---

**Art. 8**

<p>Para el despacho ordinario y la decisión</p>	<p>1. Para el despacho ordinario y la decisión <b>o propuesta, según proceda,</b></p>
---	---

alguno de los derechos fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución en lugar de la alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento. Esta ampliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.

Las modificaciones del régimen interno y de la organización del Tribunal son consecuencia de la experiencia de años de funcionamiento durante los cuales se han detectado carencias atemperadas con soluciones provisionales, en general, mediante reformas reglamentarias. Algunas de las fórmulas previamente establecidas por el reglamento de organización y funcionamiento del Tribunal deben gozar de la cobertura legal que esta reforma de la ley orgánica les otorga. Desde la perspectiva de una flexibilización en pos de la eficacia, se ha regulado la figura, ya existente en virtud del artículo 2.f) del reglamento, del letrado de adscripción temporal, así como la apertura del Cuerpo de Letrados a especialistas de todas las ramas del derecho, eliminando el requisito de especialización en derecho público que enunciaba el antiguo artículo 97.3 y permitiendo su configuración de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, de modo que sea el propio Tribunal Constitucional el que fije la caracterización más adecuada".

<sup>5</sup> Texto previo: "Las resoluciones del Tribunal Constitucional agotan la vía jurisdiccional interna. Ninguna otra jurisdicción del Estado puede enjuiciarlas a ningún efecto."

<p>sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán Secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.</p>	<p>sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de <b>procesos constitucionales</b>, el Pleno y las Salas constituirán Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.</p> <p>2. <b>Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley.</b></p> <p>3. <b>Podrá corresponder también a las Secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les defiera en los términos previstos en esta ley.</b></p>
---	--

**Art. 10**

<p>El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:</p> <p>a) De los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad.</p> <p>b) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.</p> <p>c) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.</p> <p>c) bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local.</p> <p>d) Del control previo de constitucionalidad.</p> <p>e) De las impugnaciones previstas en el numero 2 del artículo 161 de la Constitución.</p>	<p>1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:</p> <p>a) sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los <b>tratados internacionales</b>.</p> <p>b) <b>De los recursos de inconstitucionalidad contra de las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación.</b></p> <p>c) <b>De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.</b></p> <p>d) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí.</p> <p>e) De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución.</p> <p>f) De los conflictos en defensa de la autonomía local.</p> <p>g) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.</p> <p><b>h) De las anulaciones en defensa de la</b></p>
---	---

<p>f) De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.</p> <p>g) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.</p> <p>h) De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.</p> <p>i) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23 <del>de la presente Ley</del>.</p> <p>j) De la aprobación y modificación de los Reglamentos del Tribunal.</p> <p>k) De cualquier otro asunto que, siendo competencia del Tribunal, recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una Ley orgánica.</p>	<p>jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4. 3.</p> <p>i) De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.</p> <p>j) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.</p> <p>k) De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.</p> <p>l) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23.</p> <p>m) De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.</p> <p>n) De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal <b>pero</b> recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica.</p> <p>2. En los casos previstos en los párrafos d), e) y f) del apartado anterior, en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes.</p> <p>3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado.</p>
---	--

**Art. 15**

<p>El Presidente del Tribunal Constitucional ostenta la representación del mismo, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal, e insta del Ministerio de Justicia la convocatoria para cubrir las plazas de Secretarios, Oficiales,</p>	<p>El Presidente del Tribunal Constitucional <b>ejerce</b> la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; <b> nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el</b></p>
---	---

Auxiliares y Subalternos.	personal del Tribunal.
---------------------------	------------------------

**Art. 16. 1. 2., 3. y 4.**

<p>Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159.1 de la Constitución.</p> <p>Dos. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el</p>	<p>(...)</p> <p>Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.</p> <p>2.<sup>6</sup> Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos.</p> <p>3. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados.</p>
---	---

<sup>6</sup> Redacción previa de los apartados 2, 3 y 4:

“2. Previamente a la formalización de la propuesta, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial pondrán en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de las personas que hayan de ser objeto de aquélla ~~la misma~~, a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento.

3. Los Reglamentos del Congreso y del Senado dispondrán la forma en que habrá de realizarse la comparecencia ante las correspondientes Comisiones de las personas que hayan de ser propuestas por las Cámaras como Magistrados del Tribunal Constitucional.

4. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.”

<p>Tribunal por terceras partes cada tres. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.</p>	<p>4. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.</p>
--	--

**Art. 20**

<p>Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados Magistrados del Tribunal, pasarán a la situación de excedencia especial en su carrera de origen.</p>	<p>Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados Magistrados y letrados del Tribunal pasarán a la situación de <b>servicios especiales</b> en su carrera de origen.</p>
---	---

**Art. 35. 2. y 3.**

<p>Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia,</p> <p style="text-align: right;">debiendo</p> <p>concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, resolviendo el Juez seguidamente y sin más trámite en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegase a sentencia firme.</p>	<p>2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, <b>o la resolución jurisdiccional que procediese</b>, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de esta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.</p> <p>3. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva</p>
--	--

	definitivamente sobre la cuestión.
--	------------------------------------

**Art. 37. 2. y 3.**

<p>Dos. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días.</p>	<p>2. Publicada en el “Boletín Oficial del Estado” la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días.</p> <p>3. (actual dos)  <del>El Tribunal Constitucional trasladará la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una ley o a otra disposición normativa con fuerza de ley dictadas por una comunidad autónoma, a sus órganos legislativo y ejecutivo, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de 15 días.</del>                  Concluido éste el plazo de alegaciones, el Tribunal señalará día para la vista, en su caso, o para deliberación y votación. La sentencia habrá de dictarse en el plazo de 10 días contados a partir del día señalado para la vista o deliberación, salvo que, motivadamente, el Tribunal estime necesario un plazo más amplio, que nunca podrá exceder de 30 días.</p>
---	--

**Art. 40. 2**

<p>Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre Leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.</p>	<p>2. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.</p>
---	---

**Art. 41. 2.**

<p>Dos. El recurso de amparo constitucional</p>	<p>2. El recurso de amparo constitucional</p>
---	---



<p><del>protege a todos los ciudadanos</del>, en los términos que la presente Ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.</p>	<p>protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.</p>
--	--

**Art. 43. 1.**

<p>Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, <del>de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución.</del></p>	<p>1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, <b>omisiones</b> o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.</p>
--	---

**Art. 44**

<p>Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:</p> <p>a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.</p> <p>b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.</p> <p>c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez</p>	<p>1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:</p> <p>a) Que se hayan agotado todos los <b>medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto utilizables</b> dentro de la vía judicial.</p> <p>b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.</p> <p>c) Que se haya <b>denunciado</b> formalmente en el proceso, <b>si hubo oportunidad</b>, la vulneración del derecho constitucional tan</p>
--	---

<p>conocida la violación, hubiere lugar para ello.                  Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.</p>	<p>pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.                  2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.</p>
---	--

**Art. 48**

<p>El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional.</p>	<p>El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional <b>y, en su caso, a las Secciones.</b></p>
--	--

**Art. 49. 1. y 4.**

<p>Uno. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.</p>	<p>1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. <b>En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.</b>                  (...)                  4. <b>De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso.</b></p>
---	--

**Art. 50**

<p>Uno. La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:</p> <p>a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los</p>	<p><b>1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite.</b> La Sección, por unanimidad de sus miembros, <b>acordará</b> mediante providencia <b>la admisión, en todo o en parte,</b> del recurso solamente cuando concurran <b>todos los siguientes requisitos:</b></p> <p>a) <b>Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.</b></p>
--	---

<p>requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 <del>o concurra en la misma el caso al que se refiere el artículo 4.2.</del></p> <p>b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.</p> <p>c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional</p> <p>d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias.</p> <p><del>Dos. La providencia a que se refiere el apartado anterior, que indicará el supuesto en el que se encuentra el recurso;</del> se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podrá recurrir el Ministerio Fiscal, en súplica, en el plazo de tres días. El recurso se resolverá mediante auto.</p> <p><del>Tres. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no hubiere unanimidad, la Sección, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar mediante auto la inadmisión del recurso.</del></p> <p><del>Cuatro. Contra los autos a los que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores no cabrá recurso alguno.</del></p> <p>Cinco. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, <del>la Sección</del> procederá en la forma prevista en el artículo <del>85.2</del>; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.</p>	<p>b) <del>Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.</del></p> <p><del>2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución. que resolverá mediante providencia.</del></p> <p><del>3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán se limitarán a especificar el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.</del></p> <p>4. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo <del>49.4</del>; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.</p>
--	--

**Art. 52. 2. y 3.**

<p><del>Dos. La Sala, de oficio o a instancia de</del></p>	<p>2. Presentadas las alegaciones o</p>
--	---

<p><del>parte, podrá acordar la sustitución del trámite de alegaciones por la celebración de vista oral.</del></p> <p>Tres. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado sin otros trámites, la Sala pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de diez días.</p>	<p>transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación.</p> <p>3. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.</p>
---	---

**Art. 53**

<p>La Sala, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos: a) Otorgamiento de amparo. b) Denegación de amparo.</p>	<p>La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos: a) Otorgamiento de amparo. b) Denegación de amparo.</p>
--	--

**Art. 54**

<p>Cuando la Sala conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de los Jueces y Tribunales limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.</p>	<p>Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.</p>
---	---

**Art. 55. 2.**

<p>Dos. En el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes.</p>	<p>2. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículo 35 y siguientes.</p>
---	---

**Art. 56**

<p>Uno. La Sala que conozca de un recurso de amparo suspenderá, de oficio o a instancia del recurrente, la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo constitucional, cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad. Podrá, no obstante, denegar la suspensión cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero.</p> <p>Dos. La suspensión podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se substanciará con audiencia de las partes, y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de tres días y con informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala lo creyera necesario. La suspensión podrá acordarse con o sin afianzamiento.</p> <p>La Sala podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiere seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieren originarse.</p>	<p>1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.</p> <p>2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.</p> <p>3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.</p> <p>4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario.</p> <p>La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiere seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse.</p> <p>5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano</p>
--	---

	<p>jurisdiccional de instancia.          6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno.</p>
--	--

**Art. 73. 2.**

<p>Dos. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmare que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquélla no rectificare en el sentido que le hubiere sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional. A tal efecto, presentará escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará certificación de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el número anterior de este artículo.</p>	<p>2. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional <b>dentro del mes siguiente</b>. A tal efecto, presentará un escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará una certificación de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el <b>apartado</b> anterior de este artículo.</p>
---	---

**Art. 85. 2. y 3.**

<p><del>Dos. En los supuestos subsanables a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley, el Tribunal deberá notificar al recurrente los motivos de inadmisión que hubiere, con objeto de que, dentro del plazo de diez días, pueda subsanar los defectos advertidos.</del></p>	<p>2. Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, en la secretaría del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.</p>
---	---

	<p>El Tribunal determinará reglamentariamente las condiciones de empleo, a los efectos anteriores, de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos.</p> <p>3. El Pleno o las Salas podrán acordar la celebración de vista oral.<sup>7</sup></p>
--	---

**Art. 86. 2. y 3.**

<p>Dos. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI de esta Ley se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" dentro de los treinta días siguientes a la fecha del fallo.</p>	<p>2. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo.</p> <p>También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma forma cuando así lo estime conveniente.</p> <p>3. Sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podrá disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas sean objeto de publicación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución.</p>
---	---

**Art. 88. 1.**

<p>Uno. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier Administración Pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. En tal caso, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que éstas aleguen lo que a su derecho convenga.</p>	<p>1. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier Administración pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. Si el recurso hubiera sido ya admitido, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que estas aleguen lo que a su derecho convenga.</p>
--	---

**Art. 90. 2.**

<p>Dos. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en un voto particular su opinión discrepante</p>	<p>2. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en voto particular su opinión discrepante, siempre que haya</p>
---	--

<sup>7</sup> Apartado recuperado por la Comisión.

<p>defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a su fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y, cuando se trate de sentencias o de declaraciones, se publicarán con éstas en el "Boletín Oficial del Estado".</p>	<p><b>sido</b> defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución <b>y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarán con éstas en el "Boletín Oficial del Estado" tendrán la misma publicidad que esta</b> .</p>
--	---

**Art. 92 –segundo párrafo nuevo-**

	<p><b>Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó.</b></p>
--	---

**Art. 95. 3. y 4.**

<p>Tres. El Tribunal podrá imponer a quien formulare recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cien mil pesetas. Cuatro. Podrá imponer multas coercitivas de cinco mil a cien mil pesetas a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar.</p>	<p><b>3.</b> El Tribunal podrá imponer a quien formulase recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria <b>de 600 a 3.000 euros</b>. <b>4.</b> Podrá imponer multas coercitivas de <b>600 a 3.000 euros</b> a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar.</p>
--	--

**Art. 96. 1. y 3.**

<p>Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional: - El Secretario general. - Los Letrados. - Los Secretarios de Justicia. - Los Oficiales, los Auxiliares y los Agentes. (...)  Tres. Los cargos relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como</p>	<p><b>1.</b> Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional: a) El Secretario General. b) Los letrados. c) Los secretarios de justicia. d) <b>Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional.</b> (...)  <b>3.</b> Los cargos <b>y funciones</b> relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo,</p>
--	---



<p>con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste.</p>	<p>así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste.</p>
---	--

**Art. 97**

<p>Uno. El Tribunal Constitucional estará asistido por un Cuerpo de Letrados <del>constituido por medio de concurso-oposición, que se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal.</del></p> <p>Dos. En su caso, los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de supernumerarios por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.</p> <p><del>Tres. El concurso se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal, valorándose especialmente la especialización en Derecho público de los aspirantes.</del></p>	<p>1. El Tribunal Constitucional estará asistido por Letrados <b>que podrán ser seleccionados mediante concurso-oposición entre funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho, de acuerdo con el reglamento del Tribunal, o ser libremente designados en régimen de adscripción temporal, por el mismo Tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, fiscales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho.</b> Los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de <b>servicios especiales</b> por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.</p> <p>2. Durante los tres años inmediatamente posteriores al cese en sus funciones, los letrados tendrán la incompatibilidad a que se refiere el artículo 81.3.</p>
---	--

**Art. 98**

<p>El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario general elegido por el Pleno del Tribunal y nombrado por el Presidente entre los Letrados, <del>que desempeñará la Secretaría General del Tribunal</del> y ostentará la Jefatura de los Letrados, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.</p>	<p>El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado por el Presidente entre los letrados, <b>cuya jefatura ejercerá sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.</b></p>
---	---

**Art. 99**

<p>Uno. Corresponde al Secretario general organizar, dirigir y distribuir los servicios jurídicos, administrativos y subalternos del Tribunal, dando conocimiento al Presidente, y dirigir, coordinar y ejercer la Jefatura de los funcionarios del Tribunal y desempeñar la Secretaría General del mismo.</p> <p>Dos. Corresponde igualmente a la Secretaría General la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal.</p> <p>Tres. Las resoluciones del Secretario general <del>en materia de personal</del> serán recurribles en alzada ante el Presidente del Tribunal, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.</p>	<p>1. Corresponde también al Secretario General, <b>bajo la autoridad e instrucciones del Presidente:</b></p> <p>a) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal y la jefatura de su personal.</p> <p>b) La recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal.</p> <p>c) La preparación, ejecución y liquidación de presupuesto, asistido por el personal técnico.</p> <p>d) Las demás funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal.</p> <p>2. Las normas propias del Tribunal podrán prever supuestos de delegación de competencias administrativas del Presidente en el Secretario General. Del mismo modo podrá preverse la delegación de competencias propias del Secretario General.</p> <p>3. Contra las resoluciones del Secretario General podrá interponerse recurso <b>ordinario de alzada</b> ante el Presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.</p>
--	--

**Art. 100**

<p>El Tribunal <del>y las Salas</del> tendrán el número de Secretarios de Justicia que <del>se determinen</del>. Los Secretarios de Justicia procederán del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.</p>	<p>El Tribunal tendrá el número de secretarios de justicia <b>que determine su plantilla</b>. Los secretarios de justicia procederán del Cuerpo de Secretarios Judiciales y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.</p>
---	--

**Art. 102**

<p><del>Se adscribirán al Tribunal Constitucional Oficiales, Auxiliares, Agentes y demás personal en la medida necesaria para atender el servicio. El Reglamento fijará las condiciones necesarias para el acceso</del></p>	<p>El Tribunal Constitucional adscribirá a su servicio el personal de la Administración de justicia y demás funcionarios en las condiciones que fije su reglamento. Podrá, asimismo, contratar personal en</p>
---	--

<p><del>a estos cargos.</del></p>	<p>régimen laboral para el desempeño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional, y cuyas funciones sean propias de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. La contratación de este personal laboral se realizará mediante procesos de selección ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad.</p>
-----------------------------------	---

### Disposición adicional primera

<p><del>1. El Tribunal Constitucional dispondrá inicialmente de dieciséis Letrados y de tres Secretarios de Justicia.</del></p> <p>2. El Tribunal una vez instituido, establecerá la plantilla de su personal, que sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos.</p>	<p>1. El número de letrados seleccionados mediante concurso-oposición a los que se refiere el artículo 97.1 no podrá exceder de 16.</p> <p>2. La plantilla del personal del Tribunal Constitucional sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.</p>
--	--

### Disposición transitoria primera

<p>La posibilidad de que el Pleno defiera a las Salas o éstas a las Secciones el conocimiento y la resolución de asuntos que en principio corresponde a aquéllas, prevista en la nueva redacción de los artículos 8.2, 10.1 b), 10.2 y 52.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional <del>LOTG</del>, se podrá aplicar a los procesos constitucionales iniciados antes de la vigencia de la presente Ley Orgánica.</p>	
--	--

### Disposición transitoria segunda

<p>1. El plazo de treinta días establecido en la nueva redacción de los artículos 43.2 y 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional <del>LOTG</del> se aplicará si en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica no ha expirado el plazo establecido en la redacción exterior de esos preceptos, en cuyo caso la parte dispondrá de los días que resten desde la fecha inicial del cómputo.</p> <p>2. La posibilidad de válida presentación de recursos de amparo en el día siguiente al del vencimiento del plazo de interposición a que se refiere el artículo 85.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional <del>LOTG</del> sólo se aplicará si dicho vencimiento tiene lugar tras la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.</p>
---

### Disposición transitoria tercera

<p>La admisión e inadmisión de los recursos de amparo cuya demanda se haya interpuesto antes de la vigencia de esta Ley Orgánica se regirá por la normativa anterior. No obstante, la providencia de inadmisión se limitará a expresar el supuesto</p>
--

en el que se encuentra el recurso.

#### Disposición transitoria cuarta

Las previsiones del artículo 55.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ~~LOTG~~ se aplicarán con independencia de la fecha de iniciación del proceso de amparo.

**Disposición final primera.** *Modificación de la de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*

#### Art. 241. 1 I LOPJ

1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en ~~defectos de forma que hayan causado indefensión o en la incongruencia del fallo~~, siempre que los primeros no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, ésta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en **cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución**, siempre que aquélla no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso **y siempre que dicha resolución sea firme no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.**

#### Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.